088 - 089

Debate
e Investigación

Patrimonio y desarrollo
rural en Andalucía

PH42 - Febrero 2003

Debate e Investigación

Patrimonio y desarrollo rural en Andalucía

David Barrera

Consultor en turismo cultural y patrimonio

Se ofrece una opinión personal acerca de la importante contribución que se está haciendo desde el ámbito del desarrollo rural, y muy especialmente desde los programas Leader y Proder, a la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural en el medio rural. En el artículo se destaca la estrecha relación que existe entre las tareas tradicionales agropecuarias y el patrimonio de la Andalucía rural, poniendo de manifiesto las tendencias de todo tipo que obstaculizan un desarrollo armonizado de ambos sectores y aportando ideas para un debate acerca de las posibles alternativas a los planteamientos actuales, considerados por el autor como excesivamente rígidos, jerárquicos y poco imaginativos.

Palabras clave

Patrimonio cultural
Desarrollo rural
Andalucía
Unión Europea
Política Agraria Común
Programa Proder
Programa Leader
Junta de Andalucía
Turismo cultural
Política cultural

Desde la perspectiva actual, en que se han estrechado tanto las distancias entre patrimonio y antropología cultural, es realmente difícil hablar del patrimonio en el medio rural sin remitirse en algún momento a las tareas tradicionales agropecuarias que han dictado en nuestros pueblos las relaciones entre el hombre y su entorno inmediato a lo largo de la historia. Vayan pues por delante mis excusas por mi tendencia a detenerme en aspectos que podrían considerarse como poco culturales.

Si resulta difícil llegar a un consenso sobre lo que es y lo que no es patrimonio cultural en el medio rural, es casi un atrevimiento por mi parte hablar de ello para el conjunto de Andalucía, segunda región en extensión de España y de la Unión Europea. Por este motivo hago mías las palabras de Roger Scruton (profesor de Filosofía del Birkbeck College, Londres) cuando dice que la realidad no es más que sistemática apariencia y que las teorías se limitan a compendiar observaciones. En este artículo se propone un compendio de observaciones con el único objetivo de contribuir al debate sugerido por el dossier especial de PH, destinado al Patrimonio y Desarrollo, como opinión personal constructiva, formada a partir del trabajo diario con entidades y organismos oficiales implicados en el desarrollo rural de Andalucía.

Para situarnos y, dejando de lado consideraciones acerca de la conveniencia o no de la **Política Agraria Común**, lo cierto es que, en Europa se destina únicamente el 1,5% del presupuesto total de la PAC a medidas no agrarias de desarrollo rural, cantidad de la que a España le corresponde el 17% por tratarse de un país eminentemente rural (90% del territorio y 20% de la población, 35% en Andalucía) y estar predestinado a reducir paulatinamente su peso en el sector primario de la Unión. Mayoritariamente estos fondos y en menor medida otros procedentes de las administraciones central, autonómica e incluso local, financiarán la puesta en marcha de los programas Proder de Andalucía y Leader Plus de Andalucía, con un montante total de 342,13 millones de euros para el periodo 2002-2006. El programa Proder de Andalucía se distribuye entre 50 grupos de desarrollo que cubren prácticamente la totalidad del medio rural andaluz, de entre los cuales 22, seleccionados por una comisión, gestionarán además la iniciativa comunitaria Leader Plus.

Entender la importancia que tienen y han tenido estos fondos en el desarrollo de proyectos e iniciativas vinculadas al patrimonio cultural del medio rural es fundamental, sobretodo si partimos de los **principios del desarrollo endógeno** para el que la valorización de los recursos locales, la participación de la población y el aumento de la calidad de vida son sus principales argumentos. Aunque lamentablemente en el momento de escribir este artículo no se disponen todavía de cifras oficiales del total invertido por los programas Leader II y Proder (1994-1999), un estudio pormenorizado (proyecto a proyecto) realizado con datos parciales del programa Leader II¹ concluye que 22,5 millones de euros, un 38% de la inversión pública total, se había destinado a proyectos

¹ TASSARA ANDRADE, Pilar. Programas de desarrollo rural y patrimonio: El impacto de los fondos europeos en Andalucía. EN Jornadas Andaluzas de Difusión (6ª. 2001. Málaga). Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2002

² Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2002

e iniciativas públicas o privadas de contenido indiscutiblemente patrimonial. De esta cantidad, a la que habría que sumar lo invertido en patrimonio por el programa Proder, un 43% se invirtió en equipamientos e infraestructuras (museos, centros de documentación, centros de interpretación, etc.); un 23% a la puesta en valor (señalización, alumbrado, mejora de caminos, etc); un 20% a la rehabilitación (recuperación de ermitas, puentes, molinos, murallas, etc.); un 10% a la difusión (guías, publicaciones, jornadas, seminarios, etc.); y un 4% a la investigación (estudios, inventarios, etc.). Como referencia, el año 2002, la Consejería de Cultura había invertido dentro del programa de Bienes Culturales un total de 29 millones de euros para el conjunto de Andalucía², buena parte de los cuales han ido a parar a las zonas menos rurales de nuestra comunidad.

Analizando los proyectos patrimoniales apoyados por ambos programas, encontramos muy pocos ejemplos de planes territoriales de interpretación del territorio que permitan ordenar la oferta cultural y turística, que incorporen instrumentos de control y de gestión de los flujos turísticos, que tengan en cuenta la capacidad de carga cultural del territorio, que se preocupen por la viabilidad económica (centros de interpretación flamantemente inaugurados están ahora cerrados por falta de presupuesto) y que entiendan que forman parte de una realidad cultural más amplia. En cambio, sí abunda, como receta cultural de éxito, el binomio museo etnológico-molino/almazara, al que hay que añadir, si procede, la Sala o Centro de Interpretación que los Parques Naturales reparten entre sus municipios como incomprensible disculpa y compensación por ayudarles a conservar los recursos naturales que los hacen atractivos. Destacando el aumento en el nivel museológico y museográfico que se ha conseguido en los

diez últimos años en Andalucía, tendríamos que hacer **un esfuerzo por encontrar soluciones más imaginativas** y novedosas que ayuden a propios y foráneos (por este orden) a entender el importante legado cultural del que somos depositarios. Soy de la opinión de que sólo se entiende lo que se siente y de que lo no se entiende simplemente no interesa, por lo que la identidad cultural andaluza depende en buena parte de nuestra capacidad de hacer sentir nuestro patrimonio a las futuras generaciones.

Sin entrar en discusiones estériles sobre quién está invirtiendo realmente en el patrimonio cultural de los pueblos, lo cierto es que existe una importante aportación de recursos económicos, que se están gestionando por los cincuenta grupos de desarrollo existentes en Andalucía bajo la tutela de la Consejería de Agricultura y

Voces

Patrimonio y desarrollo local: sí, pero...

José Castillo Ruiz

Profesor Titular Historia del Arte. Universidad de Granada

Vincular, hoy en día, Patrimonio y desarrollo, especialmente si se añaden adjetivos como sostenible, local o solidario, constituye, tanto en el ámbito del pensamiento como de la praxis administrativa, una garantía de atención, éxito, progreso o modernidad.

Pues bien, aun partiendo, como premisa, de que la consecución de beneficios económicos a través de la acción patrimonial me parece legítima, tengo que manifestar que, al igual que sucedió con los centros históricos en las décadas de los setenta y

ochenta, la orientación productiva de la tutela puede resultar paralizante para el conjunto de bienes que integran el Patrimonio, dada la desmesura de las responsabilidades atribuidas al mismo bajo esa consideración. Hacer depender, más o menos directamente, del aprovechamiento productivo de los "recursos patrimoniales" la satisfacción de exigencias sociales irrenunciables como el reequilibrio territorial de una región, el desarrollo sostenible de una zona determinada o la vertebración o integración social de la misma, puede resultar, sino se redimensionan adecuadamente estos objetivos, muy peligroso para la continuidad histórica del Patrimonio, ya que son tan absolutamente legítimas esas necesidades sociales que ni siquiera la imposibilidad material y valorativa de los propios recursos (la imposibilidad, por ejemplo, de dar cabida a más turistas en un determinado monumento o la de incorporar una función altamente productiva en un inmueble incompatible con dicho uso) resulta suficiente para impedir o anular su consecución.

No deja de ser curioso, en este sentido, que las necesidades vitales del hombre, cuya consideración -aunque no en la dimen-

Pesca sin el control y, muchas veces, sin siquiera el conocimiento de la propia Consejería de Cultura (sobre todo en las intervenciones para las que no se requiere un informe preceptivo de la correspondiente delegación provincial de esta Consejería). El problema se encuentra no tanto en el plano económico en el que la Consejería de Agricultura y Pesca ha demostrado su solvencia sino en el plano cultural, para lo cual no dispone de los recursos humanos necesarios para acompañar los procesos de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio comarcal andaluz.

Se ponen de manifiesto pues dos carencias directamente atribuibles al conjunto de administraciones del estado, de las que no escapa nuestra administración regional. Se trata, por un lado, de la **ausencia de medidas transversales**, o de cooperación interdepartamental o simplemente un marco institucional que defina las relaciones que deberían existir, en nuestro caso, entre la Consejería de Agricultura y Pesca y la de Cultura y, por el otro, la **inexistencia de una evaluación** adecuada de las intervenciones públicas y privadas asociadas a los programas de desarrollo como Leader o Proder.

Respecto a estos procesos de seguimiento y evaluación, es evidente una creciente implicación en el control y fiscalización de dichos programas por parte de la Consejería de Agricultura y Pesca como ha quedado de manifiesto en los decretos 7/2002 y 8/2002, del 15 de enero, que regulan los programas Proder de Andalucía y Leader Plus, respectivamente. Si anteriormente en los programas Leader, Leader II y Proder eran los grupos competentes para decidir los proyectos a subvencionar, a pesar de la intervención económica de un organismo público y del papel consultivo de la delegación provincial de la Consejería, en los nuevos programas esa decisión final se traslada de manera vinculante a las

delegaciones provinciales lo que previsiblemente se traducirá en una menor agilidad en la gestión y un progresivo distanciamiento de los grupos de desarrollo con las dinámicas y tiempos del territorio. Por otro lado, estos procesos de seguimiento y evaluación, se están centrando cada vez más en los aspectos administrativos y económicos del programa que, hasta la fecha, no han ido más allá de la comprobación "in situ" de la existencia real de las intervenciones justificadas. Se echa de menos por parte de esta consejería, como organismo coordinador de ambos programas en Andalucía o incluso del propio Observatorio Leader de ámbito europeo, un mayor interés por la idoneidad del modelo de desarrollo comarcal, por las medidas de conservación del medioambiente, por el nivel de participación de la población y, también, por la solvencia cultural de las propuestas patrimoniales. Teniendo en cuenta que para la nueva etapa de los programas Proder y Leader el patrimonio será uno de los aspectos aglutinantes (prioritarios), tal vez la Consejería de Cultura, libre de las farragosas responsabilidades directas sobre los programas y de común acuerdo con la Consejería de Agricultura y Pesca, podría implicarse más en el día a día del desarrollo cultural de las comarcas andaluzas, creando un observatorio que asesorara la puesta en valor del patrimonio, que apoyara la inscripción de nuevos elementos en el catálogo de bienes culturales, que asegurara un mayor respeto hacia las técnicas constructivas tradicionales, que financiara programas específicos de intervenciones arqueológicas y que contribuyera a dar, en definitiva, esa visión cultural de conjunto tan difícil de obtener desde la perspectiva de la Consejería de Agricultura y Pesca y desde los grupos de desarrollo.

Precisamente esa ausencia de visión de conjunto está llevando algunas **apuestas patrimoniales locales al límite de su viabilidad**.

>>> sión económica ahora tan resaltada- como sustentadoras de los valores patrimoniales supuso el inicio de la Protección como disciplina científica (Alois Riegl como principal artífice), pudieran acabar "devorando" a los objetos sobre los que pretendían evaluarse y, muy especialmente, regenerarse.

Por tanto, hay que admitir y apoyar cualquier cambio en la finalidad tutelar que obedezca a la historicidad propia de la disciplina, pero desde la continuidad e integración en los fundamentos tutelares que otorgan científicidad a la misma y que han sido fruto de una larga maduración histórica. Esto implica no renunciar a principios indiscutibles como la superioridad de la autenticidad cultural del bien (prescindir de valores relevantes de un bien para potenciar la capacidad productiva del mismo, supone desistir de su propia consideración patrimonial), la prevalencia de la acción pública (otorgar una participación elevada a los agentes privados acogiéndose a argumentos "fraudulentos" como la necesidad financiera o el aumento de la participación social, supone diluir la contundencia de una premisa irrefutable: el Patrimonio existe y se funda en la exis-

tencia de un interés público y social) o la planificación global y conjunta de todos los bienes patrimoniales (administrar localmente el patrimonio de una zona supone discriminar a aquellos ciudadanos que, amparados en la universalidad de los valores culturales, reclaman una acción conjunta y unitaria de todos los bienes por encima de abstractas, circunstanciales y fragmentadas fronteras administrativas).

No hace mucho una animadora de un grupo de desarrollo defendía la necesidad de que en cada pueblo se recuperara un molino y se hiciera un museo para que los visitantes no tuvieran que salir fuera para encontrar alicientes culturales. Todos sabemos que algunas decisiones administrativas como la determinación de fronteras han traído importantes consecuencias a nivel cultural, al quedar culturas enteras divididas entre estados o incluso regiones dentro de un mismo estado. En España es el caso de la cultura vasca, entre otras situaciones, dividida administrativamente entre varias regiones e incluso varios estados con graves consecuencias en su conservación y cohesión. Para luchar contra estas y otras situaciones, que en algunos casos rozan el absurdo, la Comisión Europea lanzó en 1990 la iniciativa Interreg, como instrumento financiero capaz de remendar los descosidos culturales, económicos y sociales que suponen las fronteras entre estados y crear macroespacios abiertos, más adecuados a la filosofía de la Unión; el Sudoeste Europeo, el Noroeste Atlántico o el Mediterráneo Occidental, por ejemplo. Lejos de aprender de las enseñanzas de Interreg, nuevas estructuras administrativas superpuestas sobre el territorio están creando obstáculos a la libre circulación de las ideas, de los productos, de las personas; en definitiva al desarrollo. Una de estas nuevas fronteras ha sido dibujada por los propios grupos de desarrollo, muchos de ellos en activo desde 1991, financiando proyectos e iniciativas de ámbito comarcal con escasa o nula colaboración con los territorios/comarcas vecinos. Así pues nos encontramos con territorios culturalmente aislados, con itinerarios culturales mutilados, con mapas recortados, con señalizaciones duplicadas o con costosas estructuras de gestión tan innecesarias como ineficientes (Centros de Iniciativas Turísticas para cada comarca, por ejemplo). No es posible poner en valor una vía romana como itinerario cultural, sin la colaboración entre comarcas, provincias, regiones e incluso entre estados, teniendo en cuenta que en tiempos de los romanos ninguna de estas estructuras existía y las que sí existían difícilmente casan con las actuales. Considero especialmente importante en el caso del patrimonio cultural superar esta situación, aún más llamativa viendo las excelentes relaciones de grupos de desarrollo andaluces con grupos franceses, británicos o escandinavos. Afortunadamente, la nueva etapa Proder y Leader incidirá en mayor medida en la cooperación territorial a todos los niveles, especialmente a nivel regional, una de nuestras asignaturas pendientes. ¡Quién sabe! Tal vez en el 2006 ya no nos duela que un visitante visite el molino del vecino.

Además de las relaciones que, en un plano de igualdad, deberían cultivarse entre administraciones y/o territorios, existe otro nivel de participación igualmente importante en el que me gustaría incidir. Se trata de la **democrática participación** que debería presidir incluso las relaciones verticales de dependencia como las existentes entre la Consejería, los grupos y los beneficiarios. En los decretos que regulan el funcionamiento de los programas Proder de Andalucía y Leader Plus, se insiste en el llamado enfoque bottom-up (de abajo a arriba) como estrategia de participación que ha de presidir la ejecución de ambos programas. Loable es-

trategia que se contradice con el enfoque up-bottom que está aplicando la Consejería de Agricultura y Pesca en la fase de puesta en marcha de los citados programas imponiendo, por citar tan sólo un ejemplo, presupuestos homogéneos para todos los grupos con partidas claramente incoherentes con los documentos programáticos que, acompañados de sus respectivos presupuestos, elaboraron en su día en la fase de solicitud de dichos programas (Programa de Desarrollo Endógeno, caso del Proder y un Plan de Desarrollo, caso del Leader).

Este mismo nivel de exigencia debe existir en las relaciones entre los grupos de desarrollo (asociaciones sin ánimo de lucro participadas por representantes de las administraciones locales, hasta un 50%, y por representantes del sector asociativo, sindical y empresarial) y los beneficiarios finales de las ayudas. La participación social representa uno de los pilares de nuestro sistema democrático, no como mecanismo de elección de representantes públicos sino como valor humano. A todos/as nos corresponde la obligación de participar y de crear las condiciones necesarias para que ésta fluya con facilidad en todos los ámbitos de la vida; también en los procesos de desarrollo comarcal. Para ello, un paso previo consiste en democratizar las instituciones y favorecer la transparencia y los flujos de información utilizando para ello los canales más eficaces. Cuando una persona en un pueblo se ofrece para cuidar niños o enseñar inglés, lo lógico es que se anuncie en una panadería o un supermercado para asegurar que su mensaje llegue al máximo de personas posibles. Los grupos de desarrollo deben hacer un esfuerzo por asegurar que la información –acciones formativas, subvenciones, charlas, reuniones, etc.– llegue hasta la población utilizando como caja de resonancia los espacios de relación de los públicos destinatarios, sean éstos los bares, las peluquerías o los centros veterinarios diseminados por el territorio. Utilizar como único canal las administraciones locales o, como mucho los medios de comunicación comarcales o los dispositivos electrónicos, responde más a una necesidad de justificar la participación que a un deseo real de fomentarla.

Si, como decía anteriormente, superar las fronteras (las nuevas y las viejas) es especialmente importante en apuestas patrimoniales de desarrollo, no lo es menos esta participación social a la que aludía en el párrafo anterior. Apostar por el patrimonio cultural supone poner en valor una serie de elementos que forman parte de la identidad de las gentes que, recordemos, son los herederos del sedimento cultural que ha dejado el paso de la historia en la trama urbana de los pueblos, en las tipologías constructivas, en los oficios manuales, en los sistemas de cultivo, en los aprovechamientos del agua, en las fiestas y celebraciones, en la red de caminos y vías pecuarias, etc. Sin deshacer los nudos que atenazan el territorio no es posible construir nada (sistemas de propiedad, rencillas entre pueblos, vínculos familiares, liderazgos ocultos, patrimonio cultural en manos privadas, etc.), máxime cuando se trata de recuperar aspectos culturales de los cuales la mismos pobladores son los únicos y últimos depositarios (caso de los oficios manuales, por ejemplo). Para ello, la anima-

092 - 093

Debate e Investigación

Patrimonio y desarrollo
rural en Andalucía

PH42 - Febrero 2003

ción de esta participación, y el fomento del asociacionismo formal o informal como uno de sus más claros indicadores, debería de ser eje prioritario en el proceso de desarrollo para todas las comarcas andaluzas.

A menudo, los análisis cuantitativos o excesivamente superficiales dejan de lado algunos aspectos importantes desde el punto de vista cultural y desde el propio proceso de desarrollo, dando por bueno y positivo la existencia de un **tejido asociativo** fuerte y consolidado, sin más. Sin embargo no todas las estructuras asociativas son positivas para el territorio, y no me estoy refiriendo a las que por ideología o por las razones que fueren se oponen a nuestras intenciones. Incluso estas discrepancias pueden ser positivas si se asumen los principios constitucionales y asociativos básicos (estilo de gestión democrático, igualdad de oportunidades, ausencia de ánimo de lucro, etc.). En cambio, encontramos a veces estructuras sociales que se utilizan como plataformas de poder, perpetuantes, anticuadas, personalistas, autoritarias y sexistas con gran poder social y mediático que lastran en gran manera el desarrollo en Andalucía. Es el asociacionismo malo. Organizaciones sociales de todo tipo (especialmente algunas culturales-religiosas, las deportivas y las políticas, aunque hay más) que figuran en nuestro haber asociativo, que reciben de una manera incondicional subvenciones públicas al mismo tiempo que, por ejemplo, se llevan a cabo importantes esfuerzos para impulsar la Orden de Género y la Orden de Juventud de forma transversal (esta vez sí) en todas las Consejerías y actuaciones de la Junta de Andalucía. Dada la importancia para el progreso social a todos los niveles, habría que hacer un esfuerzo por acompañar a estas estructuras por la senda de la modernización y de la recuperación de los valores democráticos.

³ Saeta. Balance Turístico año 2001
(www.andalucia.org/spa/informacion/informacionframes.html)

Ya para terminar, me gustaría dedicar unas líneas al **turismo que utiliza los recursos patrimoniales como motivo de atracción**; el turismo cultural. A fecha de noviembre de 2002, España es el país del mundo con mayor número de declaraciones de Patrimonio de la Humanidad (37) y el primer país de Europa en Reservas Mundiales de la Biosfera (22). Por otra parte, el 50% de los visitantes extranjeros visitan Andalucía atraídos por su clima seguido de un 14,5% que contesta lo hace por sus monumentos, casi el doble de los que prefieren la playa, un 7,9%³. Las cifras son elocuentes. Sin embargo, a pesar de la notable contribución del patrimonio en las campañas generales de promoción y comunicación de la oferta turística andaluza (principales monumentos, el paisaje, la gastronomía, los pueblos...), no me cabe duda de que éste -especialmente el patrimonio rural- no está recibiendo ni una pequeña parte de lo mucho que nos aporta. Ni las administraciones públicas (no existe una promoción diferenciada para el turismo cultural ni datos estadísticos oficiales desagregados del conjunto de la oferta), ni los grupos de desarrollo (esquemas repetitivos y simplificaciones de estilo neorural y corte pastoril muy del agrado de un turismo poco exigente) ni siquiera nosotros los técnicos hemos sido capaces de sacudirnos los complejos, apostar de una forma seria y reivindicar un mejor trato para el patrimonio.

Parafraseando al sociólogo Salvador Cardús; **Andalucía será rural o no será**. El sector primario en nuestra comunidad ha supuesto y sigue suponiendo la principal actividad económica y ha condicionado, en gran manera, el acervo patrimonial que hoy disfrutamos. Las personas que viven en el medio rural han demostrado, además, gran competencia como guardianes de los paisajes, saberes y valores rurales, desarrollando actividades agropecua-

Información

Agentes mediadores para el desarrollo

Carmen Jorge Delgado

Departamento de Formación y Comunicación del IAPH

España ha tenido que hacer frente en las últimas décadas a la crisis de las estructuras productivas tradicionales, basadas fundamentalmente en actividades agropecuarias y extractivas, que ha desencadenado, sobre todo en el medio rural, el aumento de los índices de desempleo, el éxodo a las ciudades y la pérdida de valores de identidad cultural.

Esta problemática, si bien muy cercana, no aparece de manera aislada en nuestro país; se corresponde con la realidad sufrida por el resto de los países de la Unión Europea, que llevó

a sus órganos de gobierno a tomar cartas en el asunto haciendo del problema del empleo el objetivo prioritario de sus políticas. Se pusieron manos a la obra para analizar la situación y buscar alternativas que proporcionasen desarrollo socio-económico en aquellas zonas más afectadas. Una de las respuestas fue la aportada por Jacques Delors en 1993 en su Libro Blanco "Crecimiento competitividad y empleo. Retos y pistas para entrar en el siglo XXI", donde establecía aquellas actividades que consideraba nuevos yacimientos de empleo, y entre los que incluyó la valorización del patrimonio y el turismo cultural.

Estas expectativas se han visto incentivadas por la Unión Europea a través del apoyo económico a proyectos e iniciativas que, utilizando como materia prima los recursos patrimoniales, proporcionen el desarrollo integral de las comarcas generando empleo y mejorando el nivel y la calidad de vida de sus habitantes.

En España hemos contado con muchos puntos a nuestro favor: regiones con la consideración de Objetivo 1 en las políticas de inversión de la UE, como es el caso de Andalucía, la riqueza pa-

rias tradicionales sostenibles cultural y medioambientalmente. Sin embargo, poca gente duda ya de que queda una, a lo sumo dos generaciones antes de que muchas de estas tareas desaparezcan y con ellas muchos elementos patrimoniales de la Andalucía rural; caminos, acequias, bancales, lindes, ferias, artesanías manuales, etc. Un ganadero salmantino de la Plataforma Rural decía hace pocos meses “Dicen que nos quieren ayudar y no nos dejan ni matar el cerdo ni construir con barro”. No le falta razón. Con la excusa de la seguridad se van recortando cada vez más las libertades en todos los ámbitos de la vida, pero con ánimo constructivo y sin caer en una excesiva idealización del pasado, el futuro nos depara algunas oportunidades que no deberíamos desaprovechar como mejorar la transferencia de la I+D agraria hasta los productores, impulsar la producción ecológica, aumentar el nivel de transformación de los productos autóctonos, desarrollar políticas comerciales alternativas (denominaciones de origen, redes de puntos de venta propios, alianzas estratégicas con el sector turístico, etc.) o desarrollar actividades humanas compatibles, como poner en valor el patrimonio y desarrollar un turismo respetuoso con la cultura y el entorno, entre otras. No son pocas las posibilidades que tenemos para construir entre todos un medio rural con más futuro, por lo que en nuestras manos está que el patrimonio caiga en manos de nuevas generaciones de campesinos o, siguiendo los pasos del maltrecho patrimonio natural, que sean técnicos y jardineros de un futuro Parque Cultural los que se encarguen de conservar nuestros pueblos y nuestros paisajes, como una muestra más de nuestra propia impotencia y de la insostenibilidad de nuestros planteamientos económicos.

trimonial, y un sector turístico consolidado que demanda más oferta cultural de calidad. Pero también se ha detectado una importante debilidad: la falta de mediadores concienciados y sensibilizados con las expectativas del patrimonio, que sean capaces de revertir los recursos económicos en su puesta en valor y difusión para obtener rentabilidad social, económica y cultural. Este panorama negativo ha ido suavizándose en los últimos años gracias, por un lado, al aumento de la oferta formativa por parte de universidades y de centros especializados de formación en el campo del desarrollo local, y por otro lado, a la descentralización de funciones, que antes eran exclusivas de la Administración Pública Estatal y Autonómica, y en la que han empezado a participar agentes locales públicos y privados.

Con respecto a la rentabilidad de los recursos, tanto económicos como patrimoniales y culturales, ha sido muy fructífera la aparición de agentes que han servido de intermediarios en su proceso de conexión. Sin embargo, en ocasiones, la diversidad mediadora lleva a la confusión, al no quedar bien delimitadas las funciones de cada uno de los agentes.

A continuación damos una relación de los agentes mediadores más significativos en el proceso de desarrollo local en Andalucía.

Agencias de Desarrollo Local (ADL)

Dependientes de la Administración Pública Local tienen como misión la obtención de rentabilidad social, económica y cultural a través de los recursos del territorio en el que se ubican. Prácticamente todo municipio cuenta con su Agencia de Desarrollo Local o bien pertenece al ámbito de actuación de una Agencia supramunicipal.

<http://ifa.ingenia.es/programas/guia/Breveregional?1>

Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLTs)

En Andalucía existen 112 unidades dependientes de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Sirven de instrumento descentralizador de las medidas promovidas por la Consejería. Entre sus funciones destacan el fomento del uso de las nuevas tecnologías, la diversificación de la actividad económica y el fomento de la cultura emprendedora. Están integrados en